

Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT O-2564-2022, se acogió con costas la demanda y se condenó a la parte demandada al pago de \$20.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral.

En contra de este fallo la demandada ha deducido recurso de nulidad, fundado la causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia del 11 de octubre último, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

Primero: Que la parte demandada funda su recurso en la causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 456 del mismo cuerpo legal.

Sostiene la recurrente que la sentencia dio por acreditado que la patología que afecta a la demandante tiene carácter laboral basándose únicamente en el “Estudio de puesto de trabajo para patologías de salud mental”, sin considerar que dicho informe fue realizado mediante telemedicina en el año 2020, época en que los empleados se encontraban bajo la modalidad de teletrabajo. Afirma que la labor que habría provocado la sobrecarga laboral fue aceptada voluntariamente por la demandante, quien además recibió el pago de horas extraordinarias y un bono por el trabajo realizado.

Añade que durante al proceso se aportó prueba de otros factores que podrían haber influido en el diagnóstico de la trabajadora, los cuales no fueron debidamente valorados por la juez. Asimismo, reclama que la omisión en la valoración de dicha prueba provoca que la sentencia carezca de un razonamiento fundamentado que justifique la conclusión a la que llegó la magistrada.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFFVXQCKHCV

En este sentido, argumenta que la existencia de daño moral debe acreditarse mediante peritajes psicológicos y psiquiátricos, elementos que no fueron aportados por la parte demandante y concluye señalando que la infracción denunciada afecta lo resuelto en la sentencia, ya que el fallo carece de justificación respecto a la prueba presentada.

Segundo: Que el fallo objeto del recurso señala que del mérito de las pruebas aportadas por las partes se establece que la demandante demandada era la de encargada de facturación y cobranza en la empresa y que a contar de fines del año 2020, principios del 2021, se comunicó al área que esas funciones se externalizarían, para lo cual debían hacer entrega de sus conocimientos a las personas de esa empresa externa que se iba a hacer cargo. Ante ello el fallo indica que la demandante participó en ese procedimiento de remplazo, entregando sus conocimientos a otra persona, lo que debía realizar durante su jornada laboral, sin perjuicio de seguir desarrollando sus funciones habituales, sin que por ello se suscribiese anexo de contrato de trabajo con esas nuevas funciones.

Seguidamente la sentencia manifiesta que por las dobles funciones realizadas por la demandante en el período indicado se produjo una sobrecarga laboral que incidió en su estado de salud, concurriendo a la Mutual de Seguridad, la que previo a entrevista, atenciones psicológicas y psiquiátricas y estudio de puesto de trabajo, determinó que presentaba un diagnóstico de trastorno de adaptación de origen laboral.

Para el fallo ha quedado establecido en autos que la demandante fue diagnosticada con una enfermedad profesional, específicamente “trastorno de adaptación”, según el Comité de Calificaciones de Enfermedades Profesionales de Patologías Mentales, detectándose como agente de riesgo “disfunción en el diseño de la tarea y/o puesto de trabajo/sobrecarga”, ello precisamente cuando prestaba servicios para la demandada.

Luego el fallo afirma que de la prueba rendida por la demandada no consta ni se acredita fehacientemente que el empleador demandado hubiere cumplido con el deber de protección que le asiste, toda vez que aporta una carta remitida a la demandante el 1 de abril de 2021, cuando ya se había empezado por la trabajadora la doble función, que implicaba capacitación a



personal externo en sus horas de trabajo, sin dejar de cumplir las funciones propias, carta en la cual se ofrece un bono “de continuidad, para el que es candidato/a en función de su experiencia dentro de la Gerencia de Finanzas y su papel fundamental en el programa “Finance for the Future”, y que en caso alguno puede estimarse como una medida de protección a la salud de la trabajadora, sino sólo una retribución económica por el mayor trabajo desempeñado. Respecto al informe de “Solicitud de Evaluación Aspectos Generales del Trabajo y Empleo emitido por la Mutual de Seguridad de fecha 23 de Julio de 2021”, la sentencia indica que resulta ser posterior a los hechos y no logra desvirtuar las conclusiones arribadas en la Evaluación de Puesto de Trabajo efectuada por la misma entidad, donde además se consignan declaraciones de trabajadores presentados por la propia empresa que dan cuenta que se trató de mucho trabajo, y aun cuando se pagó algo extra, se trataba de enseñar años de trabajo en 5 ó 6 meses a personas que no son del país y a quienes también había que capacitar en la legislación tributaria. Reprocha el fallo que ni siquiera aportó el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, que diera cuenta de las funciones del cargo, los riesgos y las medidas preventivas, menos aún que ante esas nuevas funciones se realizara por parte de la empresa alguna inducción o se les indicara los riesgos que ello implicaba, en especial respecto a sobrecarga laboral, que resultaba obvia ya que además de las funciones propias debían realizar esas capacitaciones y entrenamientos.

Tercero: Que de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, el recurso de nulidad procederá cuando haya sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

De conformidad al artículo 456 del mismo Código, el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y al hacerlo, agrega el inciso segundo de la norma, deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime, tomando en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas



o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Como ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema, la sana crítica está referida a la valoración y ponderación de la prueba, esto es, a la actividad encaminada a determinar primero los aspectos que inciden en la decisión de considerar aisladamente los medios probatorios, para precisar su eficacia, pertinencia, fuerza, vinculación con el juicio y cuanto pueda producir fe en el sentenciador respecto de su validez y su contribución al establecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, esto es, el mérito que puede incidir en la convicción del tribunal. Luego, en una valoración conjunta de los medios probatorios así determinados, extraer las conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos y fijar la forma cómo sucedieron. En ambos escalones deberá tener presente el fallador las leyes de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en la comunidad en un momento determinado, por ello es que son variables en el tiempo, pero estables en el pensamiento humano y la razón. Este es el contenido de la sana crítica o su núcleo medular; son los aspectos que no pueden ser desatendidos.

Ahora bien, la finalidad de la causal de nulidad invocada es obviamente la modificación de los hechos que la sentencia ha tenido por acreditados, mas lo anterior puede tener lugar únicamente cuando las infracciones en que se incurra sean unas que de acuerdo con la ley pueden conducir a una determinación fáctica distinta de aquella a la que arribó el fallo impugnado.

Sin perjuicio de admitirse entonces por el legislador la posibilidad no sólo de revisar, sino esencialmente de modificar los hechos demostrados, la ley ha concebido el recurso de nulidad como una herramienta destinada a controlar la legalidad de la sentencia y de ahí que no sea suficiente una infracción cualquiera a las reglas de la sana crítica. Es necesario, en los términos empleados por el legislador, que se trate de una infracción manifiesta y el sentido natural y obvio de esta expresión indica que es manifiesto aquello notorio, ostensible, patente o claro. Además, resulta



también indispensable que ello comporte un error de relevancia tal que haga ineludible la invalidación.

Cuarto: Que sobre la base del escenario descrito en el motivo Tercero, el análisis del fallo impugnado en la cuestión que interesa permite sostener que éste expresa las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud se asigna valor a la prueba rendida por la parte de la actora y no se hace lo propio con la de la compañía demandada, de manera que el examen conduce lógicamente a la conclusión que convence a la sentenciadora, de forma tal que resulta legítimo afirmar que satisface la exigencia legal contenida en el citado artículo 456.

En efecto, los pasajes pertinentes de la sentencia, transcritos en el motivo Segundo de este pronunciamiento, contienen un suficiente análisis de la prueba rendida y en ellos se aprecian las razones que se considera suficientes para estimar que la actora demostró la existencia de la enfermedad profesional que alegó y que la demandada, correspondiéndole, no hizo lo mismo respecto del deber de protección que le asiste. En el recurso se lee que “la conclusión arribada por la sentenciadora hizo caso omiso de prueba relevante aportada al proceso, sin si quiera mencionarla ni menos considerarla y analizarla” y ese defecto no es en rigor aquél a que se refiere la letra b) del artículo 478, sino uno diverso que no se ha invocado.

En todo caso, sin perjuicio que en la nulidad interpuesta sólo se contienen consideraciones abstractas acerca de lo que debe entenderse comprende la sana crítica, lo cierto es que el fallo se hace cargo de las tanto de las alegaciones como de la prueba de Farmacias Ahumada SpA y las descarta sin que se adviertan en el razonamiento contradicciones ni saltos lógicos.

En tales condiciones, no se observa que en el proceso descrito la sentencia que se revisa se haya apartado de modo manifiesto -como se vio exige el motivo de nulidad en que se sustenta el recurso- de las normas sobre apreciación de la prueba, sino que, por el contrario, aparece haberlas satisfecho debidamente.



Quinto: Que por las razones expuestas precedentemente y por no configurarse los supuestos de la causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, el recurso interpuesto debe ser declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada contra la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT O-2564-2022.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

Nº 3925-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFFVXQCKHCV

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jaime Balmaceda E., Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogada Integrante Sara Genevieve Moreno F. Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a treinta de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MFFVXQCKHCV